



FINANZAS

Empresa



POR ALBERTO BARRANCO

alberto.barranco@reforma.com.mx | barrancoalberto@prodigy.net.mx

Antídoto del shock

Planteada por el Consejo Coordinador Empresarial la alternativa de suprimir entidades públicas inútiles o redundantes en función de equilibrio frente a la brutal caída de ingresos del año próximo, la tormenta cayó sobre el presidente del organismo, Armando Paredes

Colocadas en el tapete las secretarías de la Función Pública y Energía, personeros de éstas iniciaron una insólita presión sobre el directivo, incluida la entrega de estudios en que supuestamente se avala su eficacia.

Lo cierto es que la primera no ha logrado aún un sólo golpe espectacular contra la corrupción galopante del gobierno, con énfasis en Petróleos Mexicanos, el Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad. La pólvora se ha quemado en infernitos como el colocar reglas para licitaciones o el promover reformas a las leyes en la materia.

En el caso de Energía, bastaría analizar las telas del amparo que interpuso contra ella Pemex en protección de una serie de disposiciones para limpiar el gas natural que expide, para comprobar su ausencia total de control del sector.

Con ella o sin ella tanto esta paraestatal como la Comisión Federal de Electricidad siguen caminando por la libre.

Desde otro plano, soslayada en la mira de la cúpula empresarial, la Secretaría de la Reforma Agraria constriñe su actividad a la simple tarea de sellar papelititos que avalan la venta de terrenos ejidales a particulares. Su papel estelar llegó con la pelea por la sede de la refinería. De hecho, entonces se supo que tenía un titular.

Se diría, pues, que cada una de ellas requeriría sólo de un cubículo para realizar su tarea, en función de oficina de tercer nivel.

El caso es que la alternativa estaría descartada, como lo está también la posibilidad de bajar o congelar los salarios de los altos servidores públicos, que en su momento realizó el gobierno capitalino.

¿Cómo, pues, llenar el boquete de ingreso-gasto para el año próximo, que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, calcula en 300 mil millones de pesos, y los analistas en el doble, al margen de los 480 mil que se arrastran para este 2009?

La alternativa habla de cuatro vías: incrementar el

flujo fiscal por la vía de elevar los impuestos y tarifas públicas; completar el gasto con la contratación de nuevos préstamos bancarios y colocaciones de deuda o, desde el ángulo contrario, abatir egresos vía la supresión de programas no estratégicos, o cancelar gasto de inversión.

La primera parecería en chino, dada la coyuntura de precariedad económica del país y, naturalmente, la oposición del Congreso. De hecho la pelea será brutal, dada la intención de Hacienda de mantener el Impuesto Empresarial de Tasa Única frente al clamor de suprimirlo o canjearlo por el Impuesto sobre la Renta. Y aunque la presión empresarial empuja hacia un aumento gradual de la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas para empatarla con la general, no se ve fácil que el Partido Acción Nacional quisiera cargar el costo político, tras su derrota en la elección intermedia.

La segunda alternativa pareciera suicida, de entrada frente a la posibilidad de que las calificadoras Standard & Poor's y Moody's le rebajen la calidad crediticia al país, lo que en automático encarecería las emisiones de deuda y los réditos bancarios, en la eventualidad de contratar préstamos.

Más allá, el gobierno actual, a la callada, se ha endeudado más allá de la prudencia, al punto de casi duplicar el monto con que arrancó la gestión del presidente Felipe Calderón.

De mantenerse el esquema, el riesgo habla de comparar a éste con Luis Echeverría o José López

Portillo, cuyos nombres se volvieron emblemáticos en la lucha por el poder del PAN.

Ahora que pareciera misión imposible discernir qué programas son estratégicos en un escenario de crisis. Cerrar, por ejemplo, los apoyos a los programas de vivienda sería tanto como cancelar la posibilidad de recuperación económica del país, lo mismo en el caso de los apoyos a proyectos productivos de micro y pequeñas industrias.

¿A dónde, pues, enfocar la tijera sin lacerar aún más la tragedia social del país, cuya vertiente más visible es el desempleo, el subempleo y la mortandad de las empresas?

Naturalmente, en el mismo horizonte cancelar

Continúa en siguiente hoja





proyectos de infraestructura significaría otra golpe mortal a la competitividad del país, y de pasadita a las empresas constructoras.

La paradoja del caso, sin embargo, es que el gobierno está optando por una vía indirecta: suprimir los subsidios directos o indirectos que otorga para mantener el supuestamente bajo costo en tarifas y servicios públicos, lo que se traduciría en un incremento brutal en el costo de las gasolinas y energía eléctrica. Más allá, el golpe colocaría de espaldas a la pared a Luz y Fuerza del Centro, cuya sobrevivencia se apuntala en el traspaso de partidas por 40 mil millones de pesos.

El laberinto, como lee usted, parece sin salida.

BALANCE GENERAL

La reciente colocación accionaria del Grupo ICA, que le permitió recaudar 325 millones de dólares, ha provocado una oleada de malestar por parte de sus

accionistas, al considerar que la emisión se lanzó en un momento inoportuno, lo que provocó una caída de las expectativas.

Como usted sabe, 30% de la emisión se destinó al capital nacional y 70% al extranjero.

Los papeles se cotizaron en 20 pesos, frente a los 25 que alcanzan hoy.

La expectativa hablaba de 380 millones de dólares, por más que el día previo se manejaban sólo 350 millones de dólares.

La justificación de la firma apuntaba a una urgencia de liquidez, tras haber perdido la posibilidad de un proyecto en Panamá.

La rebelión se hace mayor en la expectativa de que el presidente de la principal constructora del país, Bernardo Quintana Isaac, plantea dejar la silla a uno de sus hijos.

RESPIRO A VITRO

La noticia es que un juez de Nueva York desestimó la solicitud de un grupo de seis bancos para llevar el grupo Vitro a un juicio sumario en reclamo de una deuda derivada de operaciones en el mercado de derivados. El monto del reclamo es de 240 millones de dólares.

El apremio se apuntalaba en los incumplimientos en el pago de sus deudas del consorcio vídriero con sede central en Monterrey, que a su juicio podrían ser el preludio de un escenario de insolvencia.

El argumento de Vitro para rechazar la alternativa es que le acotaban la posibilidad de presentar pruebas de descargo.

Round, pues, para la firma, aun cuando la pelea es aún muy joven.

NUEVO LEÓN LA LIBRA

Colocada en la mesa la posibilidad de sobrevivencia presupuestal de las entidades federativas para lo que resta del año en la obtención de créditos bancarios o colocación de deuda, el gobierno de Nuevo León acaba de obtener una buena noticia: la calificadora Fitch Ratings ratificó su calidad A+, es decir "alta calidad crediticia".

La razón habla de una sobresaliente recaudación de ingresos propios. La deuda estatal asciende a 8 mil millones de pesos.